



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

28 de julio del 2009

Licenciada
Ana Isabel Antillón
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho

Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día veintisiete del mes de julio del año 2009, a la **Iniciativa de Ley No.4069** que dispone aprobar **LEY DE COMPETENCIA PENAL EN PROCESOS DE MAYOR RIESGO**.

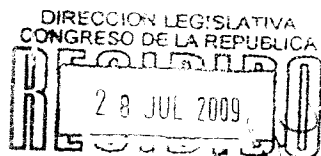
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a la Señora Directora las muestras de mi alta estima.

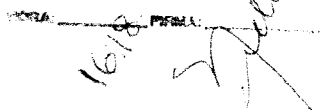

Oliverio García Rodas
Presidente de la Comisión



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Congreso de la República de Guatemala, C. A.

cc. arch.



16/10




*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

**DICTAMEN No. 07- 2009.
INICIATIVA 4069**

LEY DE COMPETENCIA PENAL EN PROCESOS DE MAYOR RIESGO.

HONORABLE PLENO:

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de julio del año 2009, el Pleno del Congreso de la República conoció la iniciativa 4069 que dispone aprobar Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, presentada por los diputados José Roberto Alejos Cámbara, Jorge Mario Barrios Falla, Aristides Baldomero Crespo Villegas, Julio Recinos Castañeda, Maura Estrada Mansilla, Lilian Elizabeth Donis y Reynabel Estrada Roca; y la traslado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

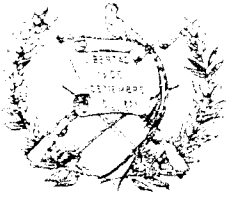
La iniciativa pretende crear competencia específica para tribunales ubicados en el municipio de Guatemala, con el fin de conocer en la fase procesal correspondiente aquellos procesos del interior de la República que siendo delitos de alto riesgo como los contemplados en la Ley Contra la Narcoactividad, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Ley Contra la Delincuencia Organizada y otras, además de ser por sí y necesitar una atención especial, denotan para los operadores de justicia y en general para los sujetos procesales, riesgos tanto en su seguridad personal como para la seguridad de sus familiares o de sus bienes.

Establece también la iniciativa un procedimiento para determinar la competencia de los jueces designados y norma también la propuesta en qué casos y sobre qué delitos podrá hacerse aplicación de la Ley.

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Consideraciones de Oportunidad y Conveniencia:

La Comisión considera que dados los hechos que se han producido en el país contra operadores de justicia, auxiliares de la misma, testigos y sujetos procesales, se hace necesario, para preservar los fines del Estado el emitir legislación que contribuya, tal



Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República
Guatemala, C.A.

como lo establecen los artículos uno y dos de nuestra Constitución Política, a garantizar a los habitantes de la República la justicia, la seguridad y la paz.

La Comisión considera que la respuesta que el Congreso de la República Órgano Político por excelencia y constitucionalmente legitimado para emitir leyes, debe ser en la búsqueda del bien común y el bienestar de la población guatemalteca. Crear los instrumentos y mecanismos legales que den más eficiencia, celeridad y eficacia a los otros Organismos del Estado e instituciones encargadas tanto de la seguridad como de la administración de justicia.

Consideraciones de Orden Constitucional:

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo doscientos tres que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás Tribunales que la ley establezca, y que ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.

En el presente caso, la propuesta que se hace de emitir una ley de esta naturaleza, no puede considerarse una intromisión de funciones de un Organismo hacia otro, puesto que el Congreso de la República es el único facultado por la Carta Magna para emitir las leyes que corresponda, estimando ésta Comisión de que dicho argumento de intromisión no puede ser aceptado ya que de apoyar esta tesis no podría el Congreso entonces emitir ninguna disposición referente a la administración de justicia tales como la propia Ley del Organismo Judicial o los Códigos en materia penal.

Adicionalmente la Comisión considera que de acuerdo al texto constitucional la función jurisdiccional, luego de que el Congreso a emitido una ley relacionada, continua siendo ejercida únicamente por los jueces y magistrados quienes conservan su función esencial que es la de juzgar, es decir aplicar las leyes al caso concreto.

De igual manera al analizar la sección tercera del capítulo uno del título segundo del Código Procesal Penal y que se refiere a los Tribunales competentes, queda claro que la competencia es determinada por la Ley (artículos 43 al 53 del Código citado), regulaciones que determinan que corresponde a cada uno de los jueces y Tribunales que en la misma se especifican, y que como ejemplo citamos claramente el artículo 48 norma que los Tribunales de Sentencia conocen del Juicio Oral y pronuncian la sentencia respectiva en los procesos **por los delitos que la Ley determina.**

En la iniciativa de análisis, queda claro que la propuesta del artículo uno está confiriendo a través de una ley, competencia para que determinados jueces actúen en



Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República
Guatemala, C.A.

determinados delitos puesto que el artículo tres de la iniciativa contiene una enumeración clara y precisa de esos ilícitos penales.

También consideramos que la iniciativa de mérito no conculca los artículos cuatro ni doce del texto constitucional ni cualquiera otra garantía de esta naturaleza, sino al contrario le otorga a los Jueces, Magistrados, Fiscales y Auxiliares de la Justicia, así como de los imputados, testigos y demás sujetos procesales que intervengan en estos procesos de alto riesgo una garantía adicional, de que en un ambiente de seguridad, pueda desarrollarse con toda objetividad un proceso penal que permita al final, emitir una sentencia o un pronunciamiento acorde a las constancias procesales.

Reafirma también la propuesta contenida en la iniciativa, lo establecido en el artículo noventa y cinco de la Ley del Organismo Judicial Decreto número 2-89 del Congreso de la República, que determina que son atribuciones de los Jueces de Primera Instancia conocer de los asuntos de su competencia **de conformidad con la Ley.**

Juzga también importante la Comisión al tenor del artículo nueve de la Ley del Organismo Judicial, Decreto ya citado, y que determina la prevalencia de los Tratados y Convenciones en materia de Derechos Humanos sobre el Derecho Interno, norma que deviene del artículo cuarenta y seis constitucional, citar los principios básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el séptimo Congreso sobre Prevención del delito y Tratamiento del delincuente celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985, que en sus numerales uno al siete especifica que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado, que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y **sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo** y que la judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida si esta dentro de la competencia que le haya atribuido la Ley, y finalmente que cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones. (Los resaltados son propios de la Comisión).

Resumiendo la Comisión considera que siendo uno de los deberes del Estado totalmente definido en el artículo dos constitucional el brindar seguridad y justicia a todas las personas, y dados los eventos que se han producido en contra del sistema de justicia en los que no puede hablarse de un ambiente libre de presiones coacciones y amenazas hacia los operadores y auxiliares de justicia, así como los sujetos procesales y de



6

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

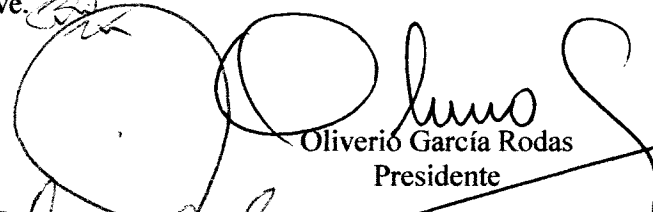
*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

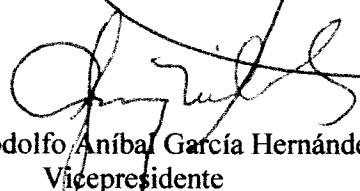
acuerdo a las consideraciones anteriormente hechas, la iniciativa analizada debe ser aprobada.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN

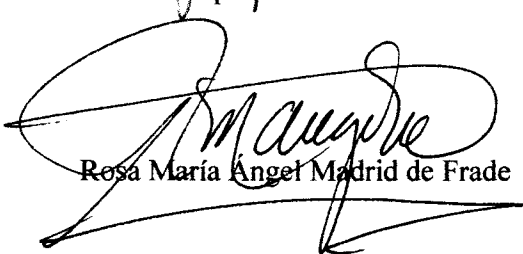
En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa **4069** que dispone aprobar Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, por ser un Proyecto de Decreto viable, oportuno, conveniente y Constitucional.

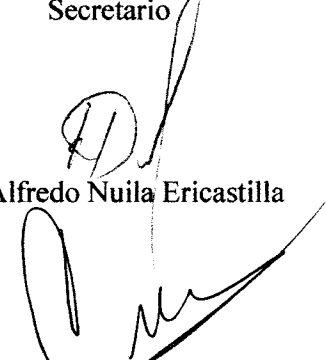
Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el veintisiete de julio de dos mil nueve.


Oliverio García Rodas
Presidente


Rodolfo Aníbal García Hernández
Vicepresidente


José Alberto Gándara Torrebiarte
Secretario


Rosa María Ángel Madrid de Frade


Héctor Alfredo Nuila Ericastilla


Francisco José Contreras Contreras


Carlos Enrique López Girón


César Augusto Del Águila López


Daniel Humberto Caballeros





*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*


Carlos Valentín Gramajo Maldonado

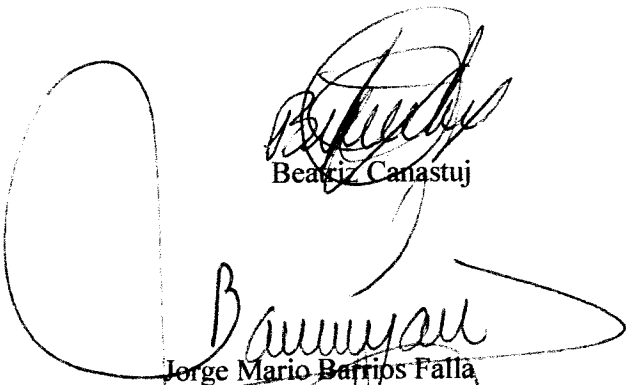

José Alejandro De León Maldonado


Félix Ovidio Monzón Pedroza


Mariano Rayo Muñoz

Oscar Valentín Leal


Beatriz Canastuj


Jorge Mario Barrios Falla


Gladys Anabella De León Ruiz


Ronnie Danilo Escobar


Rosa Elvira Zapeta

DECRETO NÚMERO ____

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República, la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral de las personas.

CONSIDERANDO:

Que una de las condiciones básicas de mantener la independencia de la justicia es la seguridad personal de los Jueces, Magistrados, Fiscales y Auxiliares de Justicia.

CONSIDERANDO:

Que la independencia de la justicia en materia penal es especialmente vulnerable al empleo de la fuerza física, amenazas, intimidaciones y otras formas de coacciones con el fin de influir en el comportamiento de los Jueces, Magistrados, Fiscales y Auxiliares de la justicia en el cumplimiento de sus funciones en la investigación y persecución penal y juzgamiento.

CONSIDERANDO:

Que existen procesos de mayor riesgo que se caracterizan por requerir medidas extraordinarias para garantizar la seguridad personal de los Jueces, Magistrados, Fiscales y Auxiliares de la justicia, testigos y demás sujetos procesales, en los cuales resultan insuficientes las medidas ordinarias de protección.

POR TANTO:

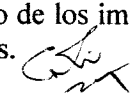
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE COMPETENCIA PENAL EN PROCESOS DE MAYOR RIESGO

Artículo 1. Tribunales competentes para procesos de mayor riesgo. El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno del municipio de Guatemala y el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del municipio de Guatemala, son competentes para conocer en la fase procesal correspondiente, los procesos del interior de la República que presenten mayores riesgos para la seguridad personal de los Jueces, Magistrados, Fiscales y Auxiliares de la justicia, así como de los imputados, testigos y demás sujetos procesales que intervengan en estos procesos.



Artículo 2. Procesos de mayor riesgo. Los procesos a que se refiere el artículo anterior son los procesos en los que concurren delitos de mayor riesgo y se presentan riesgos para la seguridad personal de las personas a que se refiere el artículo anterior, por lo que se requieren medidas extraordinarias de seguridad para:

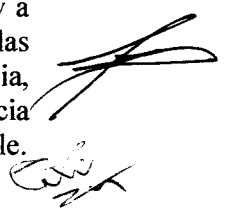
- a) El resguardo de la seguridad personal, en la realización de los actos jurisdiccionales, las actuaciones procesales, la investigación, acusación y defensa; o
- b) El resguardo y traslado de los procesados privados de libertad; o
- c) El resguardo de la seguridad personal en el espacio físico de Juzgados y Tribunales, incluyendo los aspectos de logística.

Artículo 3. Delitos de Mayor Riesgo. Para los fines de la presente Ley se consideran delitos de mayor riesgo los siguientes:

- a) Genocidio;
- b) Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario;
- c) Desaparición forzada;
- d) Tortura;
- e) Asesinato;
- f) Trata de personas;
- g) Plagio o secuestro;
- h) Parricidio;
- i) Femicidio;
- j) Delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada;
- k) Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la Ley Contra la Narcoactividad;
- l) Delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos;
- m) Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
- n) Los delitos conexos a los anteriores serán juzgados por los Tribunales competentes para procesos de mayor riesgo.

Artículo 4. Determinación de la competencia. El requerimiento para que los procesos de mayor riesgo se puedan tramitar en los Tribunales competentes para procesos de mayor riesgo deberá formularse solamente por el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, la cual resolverá dicha solicitud por medio de la Cámara Penal.

El requerimiento para otorgar competencia en procesos de mayor riesgo podrá formularse desde el inicio de la investigación hasta antes del inicio del debate oral y público. Promovido el requerimiento, la Cámara Penal citará al Ministerio Público y a las demás partes procesales a una audiencia oral que se celebrará únicamente con las partes que asistan, dentro del plazo de veinticuatro horas más el término de la distancia, si procediere. Para tales efectos, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia notificará a todas las partes a cerca de la audiencia oral por el medio más rápido posible.



Inmediatamente de celebrada la audiencia oral, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resolverá sin más trámite la cuestión planteada y remitirá los autos al Juez que corresponda, notificando a las partes.

La Cámara Penal otorgará la competencia, si en conformidad a sus antecedentes, el proceso requiere de mayores medidas de seguridad y concurre uno de los delitos de mayor riesgo, según los artículos dos y tres de la presente Ley.

Si la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia considera que no es viable acceder al requerimiento por deficiencias en la solicitud, deberá comunicar inmediatamente al Fiscal General tales deficiencias, a efecto de que éstas puedan ser subsanadas en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no lograrse subsanar tales deficiencias, la Cámara Penal dictará la resolución correspondiente con la debida fundamentación.

La Cámara Penal podrá rechazar el requerimiento del Fiscal General, fundamentando dicho rechazo en que el otorgamiento de competencia provoca en el caso concreto un obstáculo o impedimento para que las partes ejerzan sus derechos en cualquiera actuación o diligencia en la que tengan derecho a intervenir.

Las partes podrán apelar la decisión de la Cámara Penal dentro del término de tres días ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Dicha apelación será resuelta inmediatamente.

Artículo 5. Derecho de acceso a la Justicia. El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de la Defensa Pública Penal tomarán las medidas necesarias para garantizar en cada uno de los proceso de mayor riesgo, que el derecho de acceso a la Justicia, de imputados y agraviados no se vea afectado.

Artículo 6. Disposiciones derogatorias. Quedan sin efecto las disposiciones que contravengan la presente Ley.

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación el Diario Oficial.

**REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN,
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.**

**EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA EL _____ DE DOS MIL NUEVE.**

